



“El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte”: Ignacio Ellacuría

Editorial

Tropiezo en Hacienda

2

Político

La hegemonía de Zepeda en el PCN

4

Económico

Estrechez de recursos para la política social

6

Social

Recurrentes problemas municipales

8

Regional

A la expectativa de un liderazgo regional alternativo desde una Costa Rica cada vez más “centroamericana-nizada”

11

Reporte IDHUCA

Saca y mete en el gabinete

14

Tropiezo en Hacienda

La renuncia del ministro de Hacienda es incomprensible. Aun después de abandonar el cargo, ha sido elogiado por el aumento de la recaudación fiscal, debida a la última reforma tributaria. Además, pertenece al círculo de amigos del presidente Saca, tanto que éste lo acogió en las dependencias de Casa Presidencial. No tiene sentido abandonar un ministerio para convertirse en un secretario de comercio, un puesto creado para él. Aparte de que esta función parecía estar reservada a la vicepresidenta. Es indudable que su desempeño como ministro de Hacienda provocó tensiones, pero más que en el gabinete, que, como tal, no tiene peso político en la conducción gubernamental, en algunos sectores empresariales con mucho poder económico y, por consiguiente, también político. El origen de las tensiones está en el estado precario de las finanzas públicas y en las propuestas del ex ministro para intentar fortalecerlas. Su posición se habría vuelto intolerable para esos grupos de poder y, por lo tanto, insostenible para el presidente Saca. Por lo tanto, no es una renuncia, sino una caída. Con ella, aquél perdió la oportunidad para que los diputados ratificaran varios préstamos.

De las declaraciones de su sustituto se colige que el ex ministro habría generado inseguridad, y con ello, desconfianza, en los círculos del poder económico y, por lo tanto, también en Casa Presidencial. La cuestión es la siguiente. Al parecer, el presidente Saca pretende continuar con la tendencia a aumentar el gasto público, pero sin aumentar los ingresos. Como no desea modificar la estructura de la hacienda pública, tendrá que recurrir a más préstamos para financiar el gasto ordinario, que no cesa de expandirse. El mandato del nuevo ministro de Hacienda es mantener esta situación precaria y rebuscar donde no hay. Por lo tanto, las áreas social y de desarrollo económico serán recortadas otra vez, tal como ya ha sucedido en el presupuesto actual, mientras que el pago de la deuda, las pensiones y la burocracia se expanden incontenibles. La situación fiscal del país es cada vez menos sostenible.

La caída del ex ministro se debe al respaldo que dio a las propuestas de la comisión legislativa que investigaba el estado financiero del país. El ex ministro no sólo respaldó unas recomendaciones que no encontraron eco en Casa Presidencial, ni en los grandes empresarios, sino que, además, contravino la orden de no proporcionar información sobre las finanzas públicas. Ni el Banco Central de Reserva, ni el Ministerio de Economía colaboraron con la comisión. El Ministerio de Hacienda lo hizo a regañadientes, pero el ex ministro colaboró y proporcionó mucha información, preocupado por el estado financiero del país. El ex ministro ni siquiera puede explicar las razones de su caída. La orden presidencial de silencio es tajante. Otra contradicción de un gobierno que se proclama transparente.

El nuevo Ministro de Hacienda ha sido recibido con suspicacias. Es cierto que la polarización política siempre acoge estos nombramientos de forma aprensiva, pero en este caso, se agrega que el funcionario procede de una de las empresas más grandes del país, la cual, además, se ha beneficiado en gran medida del gobierno para ejercer el monopolio del transporte aéreo. Estos antecedentes no constituyen una buena carta de presentación. El ministro es considerado más un miembro de uno de los grupos empresariales más rico y poderoso del país que como un servidor del bien general. En cambio, el presidente Saca lo habría seleccionado por ser

amigo de la infancia, por la amistad que los une desde entonces y por pertenecer al mismo grupo étnico. La misión que ha recibido tampoco contribuye a crear confianza. Al parecer, la orden es conservar intacta la estructura fiscal del país, pese a ser muy frágil. Deberá arreglárselas para atender a la creciente demanda de dinero del sector social, de una burocracia en expansión y del servicio de la deuda, todo ello con las mismas fuentes de ingresos, las cuales ni siquiera cubren los gastos de funcionamiento del gobierno de ARENA.

No obstante las suspicacias, quizás no sea mala idea colocar al frente de la hacienda pública a un gran empresario. Como empresario eficaz, entiende de finanzas y, por consiguiente, no tardará en conocer por dentro la realidad del estado de la hacienda pública. Un administrador sensato y exitoso no puede permitir la expansión del gasto, sin aumentar los ingresos; de lo contrario, deberá contraer más deuda, mientras eso sea posible. Otra posibilidad es recortar el gasto y, entonces, debe decidir qué reducirá. Asimismo, comprenderá el peligro de aumentar la deuda, cuyo monto ya es muy elevado, y el riesgo que implica que salgan más dólares del país que los que entran. Aun cuando ya debe saber bastante de la corrupción gubernamental, ahora tendrá la oportunidad para conocer su alcance y lo que representa para la hacienda pública; así como también el despilfarro y la mala administración de unos fondos, recolectados con mucho esfuerzo.

Un administrador honrado debe explicar con claridad al presidente Saca el estado precario de la hacienda y sus posibilidades inmediatas. Si ya las conoce, debe esforzarse por hacerle entender que la orden que le ha dado es absurda. La cuestión es si el nuevo ministro se atreverá a tanto, pues corre el riesgo de ser destituido, al igual que su antecesor. Su larga amistad con el mandatario, los lazos de parentesco, su probada experiencia empresarial y ese tono amigable para decir las cosas difíciles, del cual hace gala, podrían ser una ventaja para hablarle sin tapujos. La dirección de ARENA no puede continuar gobernando el país sin hacerse cargo del estado precario de su hacienda. Si el ministro no se atreve a tanto, tendrá que hacer recortes, que, cualesquiera que sean, pondrá en aprietos al gobierno. Si recorta el gasto social, contradice la consigna gubernamental que proclama que lo social es el centro y no un complemento. De hecho, el área social ya ha caído en la categoría de lo prescindible con el significativo recorte de este año. Si el ministro ataca la corrupción con la mano firme y las buenas maneras que dice tener, entonces, se llevará la enemistad de personas muy cercanas al presidente Saca y a su propio grupo empresarial. Si aumenta la deuda, pone en riesgo el equilibrio macroeconómico. Si contiene la expansión de la burocracia y el dispendio que la caracteriza, porque el gobierno gasta como millonario, pero gana como pobre, se echará encima a los funcionarios, que han llegado al gobierno para medrar o componerse.

Una tercera opción es aguantar por amistad al presidente y por lealtad al grupo empresarial al cual pertenece. Pero esta actitud desdice mucho de un empresario experimentado y exitoso, además de implicar graves reparos morales. Si este fuera el rumbo que adoptara, sería parte de un gran engaño, lo cual confirmaría, una vez más, el juicio negativo que la opinión pública tiene de esta clase de empresarios, a quienes considera tramposos y corruptos, aun cuando hablen mucho de servicio a la comunidad o de responsabilidad empresarial.

La hegemonía de Ciro Cruz Zepeda en el PCN

El país tiene una fuerte tradición de prácticas políticas caudillistas, vigente desde tiempos inmemoriales, no obstante la redefinición del quehacer político iniciada con los Acuerdos de Paz. Hasta qué punto las aspiraciones democratizadoras que contienen los acuerdos de 1992 chocan con la realidad política actual es algo que puede verse, precisamente, en el caudillismo como práctica aceptada en el ámbito de los partidos políticos.

Es indiscutible que en los partidos es muy fuerte la necesidad de contar con liderazgos personales de tipo carismático. Tales figuras pueden ser un símbolo del consenso entre los distintos sectores partidarios —su militancia de base, sus cuadros dirigentes y los cuadros que ocupan cargos en las diferentes estructuras del Estado—, o bien líderes que han logrado imponer sus intereses y los de los sectores que los sostienen al resto de militantes, lo cual supone estabilidad —una estabilidad marcada por la imposición del más fuerte— en tiempos de fuertes disputas internas.

La vida democrática en el seno de un partido político es prácticamente incompatible con el control partidario ejercido por un caudillo. Y aunque hay muchas razones para sostener tal incompatibilidad, la principal es que mientras que la democracia tiende a la horizontalidad en la toma de decisiones, el caudillismo tiende a la jerarquización, misma que supone la concentración del poder (y las decisiones), precisamente, en manos del caudillo. Pese a esto, el caudillismo es algo que se da por descontado en la realidad política salvadoreña. Para el caso, en ARENA reinó la incertidumbre cuando murió su fundador, Roberto D'Aubuisson. Dicha incertidumbre se solucionó con una fórmula en la que se conjugó el caudillismo con un sistema de relevos en el liderazgo partidario. El PDC sucedió otro tanto con la muerte de Napoleón Duarte. De hecho, era tan fuerte el liderazgo de Duarte que ni figuras como Rey Prendes o Fidel Chávez Mena pudieron sacar adelante al partido, sino que más bien, con sus afanes caudillistas, lo arrastraron hacia una grave crisis tras la cual el PDC no volvió a ser el mismo.

Por último, algo parecido le ha sucedido en el FMLN con la muerte de Schafik Handal, aunque la incertidumbre efemelenista todavía no ha encontrado una solución aceptable para quienes añoran los usos y costumbres de su líder histórico. Es decir, en el FMLN no se ha perfilado aún una figura que releve a Handal. Más bien, lo que se advierte es el surgimiento de varios liderazgos personales sin que ninguno de ellos, por el momento, logre imponer su hegemonía al interior del partido.

En estos momentos, el caso del Partido de Conciliación Nacional (PCN) resulta ilustrativo al respecto del caudillismo político. Luego de las pasadas elecciones, el liderazgo de Ciro Cruz Zepeda —caudillo indiscutido del partido en la actualidad—, fue puesto a prueba. Y Cruz Zepeda salió victorioso. Para entender esto, hay que hacerse cargo de su ascendencia en las filas pecenistas.

Así, el dirigente pecenista ha cumplido con los rituales de ascenso dentro del partido: afiliado al mismo desde 1967, fue luego coordinador del movimiento juvenil partidario, para desempeñarse más adelante como secretario de asuntos jurídicos y posteriormente como Secretario Nacional del sector juvenil. En la esfera pública, se desempeñó entre 1984 y 1985 como asesor de la Fuerza Armada y posteriormente como presidente de la Corte de Cuentas (1985-1989). La culminación de su carrera ascendente fue su designación como Secretario General del PCN, en 1989, y luego como jefe de bancada del partido. La concentración de atribuciones y de poderes es un elemento propio del caudillismo político. Es una tradición (sólo para citar dos ejemplos, D'Aubuisson, además de líder de ARENA en los años ochenta, ocupó la presidencia de la Asamblea Constituyente que tomó posesión en 1982; mientras que Schafik Handal, además de haber fungido como Coordinador General de su partido durante algún tiempo, dirigió la representación legislativa efemelenista) y en las sociedades que no han consolidado prácticas e instituciones democráticas las tradiciones prácticamente no se discuten.

Hasta ahora, a Ciro Cruz Zepeda lo ha acompañado la buena suerte. Una de sus etapas más polémicas fue cuando se desempeñó como presidente de la Corte de Cuentas, pues serias sospechas de corrupción recayeron sobre sus espaldas. Con todo, salió bien librado. Asimismo, bajo su liderazgo, el PCN pudo establecer una dinámica política que lo llevó a convertirse en una pieza importante para el escenario de posguerra. Recuérdese que el PCN entra a la década de la guerra desplazado, por ARENA, como actor principal del poder político en los noventa. Consumadas las negociaciones de 1992, el PCN, aparentemente, no tenía nada que hacer en la nueva etapa del país, dada la preeminencia del enfrentamiento político entre el gobernante partido ARENA y el FMLN, que se estrenaba como institución política legalizada y apta para competir en elecciones.

Sin embargo, con la conducción de Zepeda, el PCN se convirtió, de antiguo partido de los militares, en un aliado estratégico de ARENA. No se trata de proximidad ideológica, sino de motivos mucho más prácticos. Pero lo que cuenta es la relevancia del PCN, aunque sea como un partido subordinado a ARENA. En ninguna de las elecciones celebradas después de 1992, ARENA ha logrado el control absoluto de la Asamblea Legislativa. En ese escenario, el PCN se han convertido en el portador de la "llave mágica" para permitir a ARENA obtener un voto calificado en el congreso. A cambio de ello, este último partido le ha otorgado a aquél el control de instituciones claves, como la Corte de Cuentas. Antes del arribo de Cruz Zepeda al máximo cargo de dirección en el PCN, ya se había fraguado la alianza entre este partido y ARENA; de hecho, fue esa alianza la que llevó a Cruz Zepeda a la Corte de Cuentas. Pero es con él que la subordinación a ARENA se convierte en una estrategia política, en virtud de la cual el partido, sin ser fuerte en términos electorales, concentra cuotas importantes de poder y de influencia en el Estado.

Se ha hablado en muchas ocasiones de la capacidad de ARENA de superar crisis políticas en virtud de su habilidad para reacomodarse a las nuevas situaciones. En esto, empero, el partido de gobierno no ha caminado solo. En 1997,

cuando el FMLN obtuvo la mayoría legislativa y le correspondía presidir la Asamblea, ARENA y el PCN violentaron el reglamento interno parlamentario. No sólo le arrebataron la presidencia de la Asamblea al FMLN, sino que también pusieron al frente de la misma nada menos que a Cruz Zepeda. A éste, tal nombramiento no le llegó por sorpresa, ya que fue un artífice de la jugada que permitió desembarazarse de los efemelenistas.

Ahora bien, Cruz Zepeda no sólo ha acumulado poder político dentro del PCN, sino también fuera del mismo. Al no resultar electo como diputado por Cabañas en los comicios recién pasados, el PCN hizo todo lo que pudo para lograr un recuento de votos por dicho municipio. No lo logró, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acababa de salir del tenso recuento de votos en San Salvador, que ya había implicado una buena dosis de desgaste institucional. Por supuesto que a ARENA le hubiera convenido mantener a Cruz Zepeda al frente de la directiva de la Asamblea, pero no se pudo. Obviamente, en ARENA no hay porqué alarmarse, ya que en lugar de Cruz Zepeda se nombró a Rubén Orellana, un "hombre sin atributos" que ha dejado en claro que seguirá las órdenes del máximo líder peceñista, convertido ahora en "asesor" de Orellana. Ciro Cruz Zepeda, pues, seguirá influyendo en la Asamblea Legislativa.

¿Y la anunciada crisis en el PCN a raíz de la designación del jefe de bancada por ese partido? Pues nada; se trató apenas de una escaramuza, resuelta sin mayores complicaciones por quienes en el partido están acostumbrados a negociar a espaldas de la sociedad.

Aunque su modo de operar resulta escandaloso en una sociedad cuyas élites se precian de ser muy democráticas, Ciro Cruz Zepeda expresa abiertamente cómo son en realidad las instituciones del poder en el país. El hecho de presentar con una sonrisa ante la prensa a un Elizardo González Lovo que firmaba públicamente su retractación de los ataques contra el nuevo jefe de fracción, indica que las maniobras políticas se hacen a plena luz del día y sin perder la compostura. Una renovación del liderazgo legislativo en el PCN es impensable sin el sempiterno Ciro Cruz Zepeda.

Estrechez de recursos para la política social

Uno de los gastos que genera mayor erogación de recursos para el Estado es el pago de pensiones. Dado el agotamiento de las reservas técnicas del Instituto de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el financiamiento para el pago de pensiones se realiza a través del presupuesto del Estado e implica un incremento del déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF). De esta forma, al concomitante déficit que experimenta el país durante cada ejercicio fiscal, se añade una carga que, a medida que transcurren los años, se vuelve más onerosa. Esto es preocupante ya que esta erogación de recursos limita la capacidad del Estado para aumentar la inversión pública en beneficio de la población.

Al problema se debe añadir otro: la revalorización de las pensiones. Los diputados del FMLN, Cambio Democrático (CD) y Frente Democrático Revolucionario (FDR) lucharon en la Asamblea Legislativa que cesó sus funciones el 30 de abril pasado para que hubiera un incremento en las pensiones debido al alza en el costo de la vida. Los partidos de oposición veían la necesidad de satisfacer las demandas de un sector social que resiente la reducción de sus ingresos reales debido a la evolución de la inflación. Para la aprobación del presupuesto del año en curso, los partidos políticos, siempre en la legislatura pasada, promovieron la revalorización de las pensiones de diferente manera: el FMLN pidió un alza considerable de pensiones para 2006, mientras que el CD y FDR condicionaron sus votos para la aprobación del presupuesto al compromiso del entonces ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, de hacer todo lo posible para aumentar las pensiones en 2007.

Lo anterior muestra que el tema de las pensiones atraviesa la discusión económica, política y social. Económica porque involucra la eficiente utilización de los recursos del Estado. Política porque dicho tema, aparentemente de naturaleza puramente económica, marca, de vez

en cuando, la dinámica de la negociación en la Asamblea Legislativa. Social porque involucra el bienestar de un contingente social que de ser beneficiado reduciría parte de los fondos del Estado para continuar la política social.

En los años noventa, los ingresos del Estado durante un año eran suficientes para hacer frente a los gastos en consumo, intereses y transferencias corrientes del gobierno; el ahorro corriente presentaba un saldo positivo. Pero desde 2001, el ahorro corriente muestra un saldo negativo debido a los desembolsos por deuda previsual, es decir, lo que el Estado debe en concepto de pensiones a los empleados públicos jubilados. En otras palabras, el déficit del SPNF se profundizó más, limitando los recursos del Estado.

Erogación de fondos en el pago de pensiones Millones de dólares

Año	Monto
2001	102.5
2002	157.5
2003	249.6
2004	276.5
2005*	286.5

Fuente: FUSADES

*Al mes de noviembre

Los constantes desembolsos para el pago de pensiones, la presencia de “desahorro” corriente y el alza del déficit fiscal del SPNF son variables que se combinan para mostrar el deterioro progresivo en las finanzas públicas. Este se convierte en una fuente de inestabilidad que atenta contra el equilibrio macroeconómico que exigen los agentes productivos para invertir y producir en el país. A falta de política monetaria, el Estado cuenta solamente con la política fiscal para inducir al crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública. En el país, dicho aumento parece estar limitado por la cantidad de recursos que se gastan en el pago de intereses por deuda y pensiones.

En una sociedad con múltiples necesidades insatisfechas, la escasez de recursos debido al gasto en intereses y pensiones se debe atacar mediante una mayor obtención de recursos para las arcas del Estado. Una reforma fiscal que dé paso a una estructura tributaria progresiva es una opción importante que el gobierno no debería pasar desapercibida. De lo contrario, a medida que se incremente la deuda previsional y la deuda externa, la capacidad del Estado para desarrollar programas sociales se verá disminuida.

La falta de recursos por el pago de pensiones fue planteada años atrás por FUSADES y el PNUD. Aunque en esa oportunidad la preocupación se centraba en la tendencia al alza de la deuda externa, dichas entidades ya dirigían su interés al incremento de la deuda de pensiones. Tanto para FUSADES y el PNUD, tarde o temprano el gobierno debía reconocer la importancia de ampliar la base tributaria para poseer una carga tributaria sobre el PIB capaz de hacer frente a los egresos por pensiones. De acuerdo al *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003*, a partir de 2006, el costo fiscal de las pensiones rebasará el 2% del PIB y continuará su incremento hasta llegar a representar el 2.3% del PIB en el período 2009-2012, teniendo, para este último período, una tasa de crecimiento económico del 6%.

De acuerdo a lo anterior, si se combina el alza en el pago de pensiones y persiste una baja tasa de crecimiento económico, la estabilidad fiscal del país estará amenazada. Si el gobierno quiere desarrollar una política social continua, que dependa en menor grado de préstamos y no esté restringida por la deuda de pensiones, debe hacer esfuerzos por obtener más recursos. Para el año en curso, las limitaciones saltan a la vista: mientras se debaten unos préstamos millonarios en la Asamblea Legislativa para continuar los programas Red Solidaria y Educo, los datos del BCR muestran que, en lo que va del año, los gastos en el pago de pensiones representan 11.4% de los ingresos tributarios del primer trimestre.

Ante este panorama, los esfuerzos gubernamentales

deben enfocarse en reactivar el aparato económico. Solamente una economía que pueda lograr tasas de crecimiento sostenido será capaz de proporcionar los ingresos necesarios para desarrollar una política social de mayor alcance. La promoción de este crecimiento debe ir más allá de la apuesta por el libre comercio. La esperanza de que el libre intercambio de bienes y servicios con los EEUU sea la clave para el desarrollo tiene limitaciones, sobre todo cuando se espera que los efectos de corto plazo provoquen una desarticulación productiva que afecte a la micro y pequeña empresa.

También debe impulsar una política fiscal capaz de permitir la sostenibilidad del endeudamiento público. En términos más realistas, se debe reconocer que una estructura tributaria regresiva afecta la capacidad adquisitiva de aquella parte de la población donde descansa la mayor porción de la demanda agregada. Ya es tiempo de que las autoridades acepten las limitaciones que tiene el estar dependiendo estructuralmente de empréstitos foráneos para hacer frente a las actividades del Estado. Lo peor que puede suceder —y que de hecho ya sucede— es financiar el gasto corriente mediante préstamos y emisión de títulos valores en el mercado internacional. Es decir, tapar un hoyo abriendo otro.

Finalmente, se debe trabajar por reestructurar la deuda externa, de tal forma que el monto a pagar a los acreedores no esté sujeto al vaivén de las fluctuaciones de los tipos de interés internacionales. Existe un poco más de un tercio de la deuda que se encuentra bajo un tipo de interés variable y, dada la inestabilidad de los mercados financieros internacionales, un alza considerable en los tipos de interés volverían, en cierta forma, “impagable” la deuda. Los montos que deberían destinarse al pago de intereses serían mayores y esto constreñiría mucho más la situación financiera del país.

Esas medidas podrían ayudar al gobierno a hacer frente a la estrechez financiera del Estado que ataca por dos flancos: a nivel interno mediante la deuda de pensiones y a nivel externo mediante el pago de intereses por empréstitos foráneos.

Recurrentes problemas municipales

Despidos de funcionarios de confianza, tomas de edificios municipales, enfrentamientos verbales, intervenciones policiales, desaparición de equipo y mobiliario, deudas para cuyo pago no hay recursos... todas estas situaciones son parte del tenso traspaso de mando municipal ocurrido este pasado 1 de mayo. Y es que en El Salvador, donde las gestiones municipales tienen vigencia por tres años, afloran los mismos problemas cada vez que un alcalde y su concejo ceden el poder a otros, sobre todo si se trata de distintos partidos políticos. Pero el problema de fondo parece ser este: la resistencia a dejar el poder.

Resabios de la pasada coyuntura electoral

Los últimos hechos lamentables en torno al traspaso de mando en las alcaldías salvadoreñas se han dado en un momento en que empiezan a aflorar las consecuencias negativas del proceso electoral recién finalizado. En ese sentido, no se pueden entender al margen de la alta polarización política y social que ha dejado tras de sí el último proceso electoral. El tenso traspaso municipal no es sino una consecuencia predecible de los resultados electorales municipales, donde tanto el FMLN y ARENA se vieron desplazados de alcaldías consideradas como emblemas para uno u otro partido. Casos simbólicos han sido, por ejemplo, los de San Martín, o Cuscatancingo, perdido por el partido oficial, y Zacatecoluca y Cojutepeque, cedidos por el FMLN a favor de ARENA. En todas ellas ha habido denuncias por supuestas irregularidades, al igual que ha sucedido en otras comunas del país, gobernadas no sólo por los partidos políticos mayoritarios.

Como es de esperarse, los grandes medios de comunicación han hecho más eco de las situaciones en que se inculpa a miembros del FMLN. Así, el matutino *La Prensa Gráfica* reseñó la toma de la alcal-

día de Cojutepeque “que protagonizaron el viernes [5 de mayo] un grupo de empleados despedidos”, todos afines al partido de oposición. Según la fuente, unos 100 agentes del orden pusieron fin a la acción de protesta. Dicho medio cita al presidente de la República, Antonio Saca, y a su ministro de Gobernación, quienes responsabilizan al FMLN de las acciones. “Si la población votó por una persona, es sagrada esa decisión y debe respetarse”, dijo Saca. Seguramente, se olvidó el mandatario del episodio que protagonizó luego de las elecciones, cuando levantó la mano al candidato de su partido por San Salvador en señal de victoria. Allí Saca se adelantó a la “sagrada” decisión de la ciudadanía y proclamó victorioso al candidato perdedor.

No obstante lo anterior, las irregularidades en los traspasos que han salido a la luz pública no distinguen banderas políticas. Afectan a todos los partidos, sin excepción. Y es que las acciones al estilo de la piñatada nicaragüense, en la que los seguidores de Daniel Ortega y Enrique Bolaños prácticamente se repartieron el botín de los bienes estatales, encuentran prácticas similares en El Salvador. Hay alcaldías en las que se habría arrasado con los bienes, equipo, vehículos y mobiliario municipales, antes de ceder el poder al alcalde o alcaldesa de otro partido. En otros casos, las administraciones salientes adquirieron cuantiosas deudas que ponen en aprietos las finanzas de las administraciones entrantes. En suma, en no pocos casos, los funcionarios salientes hicieron todo lo posible por sacar todo el provecho posible de los bienes municipales, que por definición no les pertenecen.

Una vieja herencia

Aún así, hay una serie de situaciones problemáticas que se han venido arrastrando desde hace varios años en el ámbito muni-

cipal. A propósito de esto, hace dos años, cuando se cumplía el primer aniversario de las administraciones salientes, se escribía desde este semanario: “un vistazo a doce meses de administración municipal en el país pone en evidencia la politización que la ha caracterizado y los pocos frutos en cuanto a desarrollo de las comunidades gobernadas. Un balance de gestión arroja más desafíos que logros y más dudas que certezas”. Pues bien, al término de las gestiones salientes puede sostenerse que los avances han sido limitados, sobre todo en las municipalidades más pobres y vulnerables financieramente.

Si se ha de hacer mención de la politización hay que decir que, entendida en el sentido de hacer prevalecer lo político partidario sobre lo estrictamente municipal, no ha habido mejoras. La politización así entendida ha sido más bien un obstáculo, muchas veces insuperable. Esta ha sido una de las causas que precisamente explica los últimos acontecimientos referentes a los traspasos municipales. Salvo muy marcadas excepciones, donde la ciudadanía no cuestiona la honestidad de los funcionarios municipales, los traspasos a miembros de otros partidos han sido poco transparentes. Paralelamente, en no pocos casos se ha visto a acuciosos periodistas tratando de hallar el más mínimo detalle que ponga en entredicho la honestidad y probidad de los funcionarios salientes. Nuevamente los funcionarios del FMLN se llevan la peor parte, sobre todo en algunas alcaldías emblemáticas.

Seguidamente se insistía desde este semanario: “de lo que no cabe duda es que en torno del municipalismo hay temas todavía pendientes que debieran ser retomados en el marco del futuro gobierno de Antonio Saca. Debido al peso del Ejecutivo en cuestiones del más alto interés nacional, es a él al que hay que endosarle la mayor responsabilidad. La propuesta del incremento de la partida presupuestaria a las municipalidades tendrá que ser revisa-

da, al mismo tiempo que deberá trabajarse en la mejora de la capacidad institucional de las comunas. El tema de la descentralización también deberá sacudirse la politización que ha padecido en la pasada campaña electoral, lo cual supone un cambio de actitud en la clase política nacional. Lo mismo puede decirse de los programas de desarrollo con énfasis territorial, sobre todo en las zonas tradicionalmente excluidas”. Con toda seguridad, dichos reclamos siguen teniendo vigencia.

El único avance en la materia ha sido el intento de nivelación presupuestaria para las alcaldías por la vía del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), que durante la presente administración presidencial se ha aumentado del 6 al 7% del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, las municipalidades argumentan que ese aumento es insuficiente para poder enfrentar las tareas que les competen. Por otro lado, el resto de desafíos sigue pendiente. No se ha hecho mayor esfuerzo, por ejemplo, para mejorar la capacidad institucional de las alcaldías.

Sumado a ello, con el vergonzoso comportamiento mostrado por muchos funcionarios en los últimos días, se socava aún más la credibilidad y probidad de los gobiernos municipales, añadiendo dosis de desconfianza entre los ciudadanos. Si después de las pasadas elecciones se produjo una agudización del deterioro de instituciones claves como la presidencia de la República, el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos, hay que decir que las municipalidades padecen ese deterioro constantemente, producto de las malas gestiones municipales y de las debilidades y desventajas del poder local.

Esto conduce al siguiente punto que tiene que ver con la descentralización, punto en el que se ha avanzado poco durante los últimos años. El gobierno central continúa concentrando buena parte de las responsabilidades y los recursos del Estado, pero se desentiende de aquellas responsabi-

análisis social

des cuando le conviene, como es el caso de los drenajes y mantenimiento de las vías de acceso de las principales ciudades. Amparados en la ambigüedad de muchas de las leyes salvadoreñas, el Ejecutivo se desentiende de buena parte de las tareas que le corresponderían y deja caer la responsabilidad en los gobiernos locales, que tienen muchas más dificultades financieras que el gobierno central. Muchas alcaldías ni siquiera alcanzan a honrar sus deudas y las trasladan a sus sucesoras, tal y como se ha enterado la opinión pública este 1 de mayo.

Los planes de desarrollo local con énfasis territorial también son todavía una deuda pendiente. Este impulso, que debiera ser más fuerte en el interior del país, ha sido mínimo, debido a la primacía de intereses partidarios, a la debilidad institucional y a la fragilidad financiera. Los esfuerzos han tenido muy poca incidencia en asuntos fundamentales como el acceso a servicios básicos y reducción de la pobreza, por citar algunos. Las llamadas microregiones o municipios asociados son las que han tenido los avances más notables, pero estas, que son muy contadas, son la excepción a la regla. Buena parte de las municipalidades del interior del país difícilmente podrían llegar a cumplir a cabalidad con sus tareas debido a aquellas debilidades.

También hay que señalar, a propósito del último proceso electoral en donde se escucharon toda clase de promesas, que los espacios de participación ciudadana siguen siendo reducidos. Y en este punto es fundamental el papel de las autoridades locales, como agentes facilitadores de esos procesos de participación a través de la institucionalización de los mismos. Si un gobierno local no se abre a la participación ciudadana difícilmente se podrán superar los desafíos municipales.

Distinto es el hecho de que la ciudadanía se organice e intente incidir en que se abran efectivamente esos espacios de participación. Si ambos sectores, autoridades y ciudadanía, contribuyeran en esa tarea

según sus competencias, seguramente la realidad sería muy diferente. Sin embargo, a la par de la desidia de las autoridades locales para abrir los espacios necesarios para que la ciudadanía participe en el desarrollo del municipio opera una actitud apática de parte de aquella respecto de los asuntos más relevantes del municipio. Por tanto, el panorama se vuelve más sombrío. Las últimas manifestaciones del deterioro municipal sumado a los desafíos estructurales de los gobiernos locales dan como resultado un escenario poco halagador, al menos en el horizonte próximo. Si no se superan ciertas actitudes y prácticas poco transparentes en el corto y mediano plazo, difícilmente se lograrán avances sustantivos en la materia.

Las denuncias de las que hace eco la prensa salvadoreña en los últimos días no deben desvincularse de este gran escenario del que son una mínima manifestación, por más que los periodistas amarillistas se esfuerzen por presentar la última y más impactante noticia. Lo que hoy es de dominio público no es ninguna novedad. Tampoco es novedad que la Corte de Cuentas no cumple su papel como garante de la transparencia y del buen manejo de los recursos públicos. En El Salvador las alcaldías siguen siendo una mina de donde se enriquecen funcionarios corruptos y deshonestos, que viven del dinero de las comunidades. De ahí que, por regla general, más que una oportunidad para fomentar el desarrollo, los gobiernos locales se han convertido en un botín electoral perseguido a toda costa y con cualquier medio, sea lícito o no.

Las pasadas elecciones, en el marco de las cuales pudieron replantearse los desafíos de las municipalidades en El Salvador, fueron una oportunidad perdida. Lo más probable es que el círculo vicioso continúe sin romperse: de ello han dado una muestra más los funcionarios salientes y los entrantes al contribuir para que se den esas situaciones bochornosas.

A la expectativa de un liderazgo regional alternativo desde una Costa Rica cada vez más “centroamericanizada”

Con declaraciones críticas hacia la política norteamericana y, paradójicamente, en medio de protestas de descontento popular hacia su intención de ratificar el TLC con Estados Unidos, Óscar Arias fue juramentado como presidente de Costa Rica este lunes 8 de mayo en un acto en el Estadio Nacional, en el que participaron miles de ciudadanos costarricenses, contando además con la asistencia de presidentes y delegaciones de casi cien países. Arias gobernó Costa Rica anteriormente entre 1986 y 1990, época en la que obtuvo el Premio Nobel por su contribución a una salida pacífica a las guerras civiles y conflictos regionales.

El recién electo presidente de Costa Rica ofreció una conferencia de prensa en vísperas de la toma de posesión, y tanto sus declaraciones expresadas en ella como su discurso oficial a la hora de tomar el mando, denotaron alarma y urgencia ante el contexto internacional y nacional, en las áreas política, económica y social. Arias hizo referencia a que su país se encuentra “en un momento límite” y que es necesario tomar decisiones porque el país no puede “seguir vagando sin norte”. Sin embargo, no son las alusiones a los retos domésticos los que llamaron más la atención, sino sus pretensiones con respecto a la dirección de la política exterior, hablando no sólo en nombre de su país, sino de Latinoamérica.

De sus declaraciones y discurso vale la pena extraer dos mensajes importantes respecto a cómo pretende relacionarse con el exterior, ya que salen fuera del patrón seguido por los presidentes del resto de países centroamericanos, lo que podría apuntar a que esta figura política —Arias— ten-

drá un importante liderazgo regional, quizás en una vía no sólo inesperada, sino alternativa, o por lo menos en un sentido que deberá mantenerse bajo observación analítica para prever un posible cambio de visión y misión de la política exterior regional.

El primer mensaje que se extrae de sus palabras es que al mundo y a él les cuesta entender que Estados Unidos dedique tantos recursos a detener a los emigrantes, a producir armas y a subsidiar a sus agricultores, y tan pocos a apoyar el desarrollo de Latinoamérica. Desglosó el mensaje general en puntos más específicos, tales como que le cuesta entender a él (y al mundo) que Washington gaste miles de millones de dólares en construir un muro para detener a los pobres de Latinoamérica en vez de ayudar al desarrollo de la pequeña y mediana industria de la región. También señaló que Estados Unidos gasta miles de millones de dólares anuales en armas, “la mitad de lo que gasta el resto del mundo”, algo que tampoco logra entender. Por otra parte, manifestó enfáticamente que “es difícil querer construir un paraíso internamente si hay un infierno afuera”.

Para cerrar la crítica, no sólo a Estados Unidos, sino a la política ejercida por su predecesor, Abel Pacheco, dijo que “dignificará” la política internacional de Costa Rica y que su país no volverá a cometer nunca más el “error imperdonable” de haber apoyado la invasión de Estados Unidos en Irak. Prometió que se volverá a alinear la política exterior costarricense con la defensa del multilateralismo y la carta de Naciones Unidas. Finalmente, calificó el apoyo dado por Costa Rica a la guerra en Irak como “un acto contrario a la tradición y la cultura del país”.

análisis regional

El segundo mensaje tiene que ver con lo que Arias llama el “Consenso de Costa Rica”. El presidente costarricense anunció que lanzará una iniciativa para que los países desarrollados perdonen deudas y brinden recursos financieros a los países más pobres, a cambio de la reducción de su gasto militar y el aumento de la inversión en educación, salud y vivienda. Agregó también que “es hora de que la comunidad financiera premie no sólo a quienes gastan con orden, como hasta ahora, sino a quien gasta con ética”. Asimismo, anunció que la protección del medio ambiente y el derecho de los pueblos al desarrollo sostenible será prioridad de la política exterior de su gobierno. “Nuestro objetivo —sostuvo— es que el nombre de Costa Rica se convierta en un sinónimo de valores fundamentales para la humanidad, el amor por la paz y el amor por la naturaleza, ese será nuestro sello distinto como país, nuestra marca país, nuestra carta de presentación ante el mundo”.

El primer mensaje apunta a un liderazgo diplomático que tiene que ver con el establecimiento de una posición crítica hacia Estados Unidos y la falta de valores éticos de su política exterior y de su forma de gastar sus recursos económicos. Sin embargo, la postura de Arias lejos de parecerse a una de tipo confrontativa al estilo del presidente Hugo Chávez, es de tipo moral y, si se quiere, más parece una invitación a Estados Unidos a que reflexione sobre su accionar en materia de política exterior y a que la reencauce, específicamente hacia los países latinoamericanos, bajo normas de tipo ético. De hecho, Arias no está diciendo “no” al TLC con Estados Unidos; todo lo contrario, está a favor del mismo porque, según él explica, no puede obviarse cuando dos tercios del comercio de su país se dan con Estados Unidos. Con esa acción, lo que está diciendo, en consonancia con sus duras críticas, es no querer enemistarse con Estados Unidos ni política ni económicamente, pero sí querer una amis-

tad cuyas condiciones no sean determinadas por ese país y sus intereses, sino por un deber ético superior.

El segundo mensaje apunta a un liderazgo propositivo, también con una carga eminentemente ética, concretado en el “Consenso de Costa Rica”. Cuando Arias dice que para merecer el favor de los países desarrollados no sólo importa la disciplina y el orden sino la ética, en el manejo de recursos y la administración pública de los mismos, está haciendo implícitamente una fuerte crítica a los países vecinos y a administraciones costarricenses anteriores, empujándose a sí mismo a adquirir un compromiso y empujando a los demás presidentes del área a optar por esa vía “ética”, al menos en el discurso. Arias también da un claro mensaje en contra de la guerra y en pro del bienestar social, apuntando hacia un liderazgo pacifista, conciliador, no sólo en nombre de y para su país, sino para todos los países latinoamericanos que se sumen a su iniciativa.

En suma, los dos mensajes de Arias representan una opción alternativa en el contexto latinoamericano en referencia a una posición frente a Estados Unidos. Por un lado, se ha contado con las típicas posiciones serviles de países como El Salvador, entre otros del área, los cuales, por no “quedar mal” con Estados Unidos, se convierten en cómplices de una guerra ilegítima. Por el otro lado, se ha contado con la postura confrontativa, a la defensiva y militarista de los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, quienes se encuentran en permanente preparación de sus pueblos para enfrentar con armas cualquier posible invasión o intervención militar estadounidense. También se encuentran los países que no son ni serviles, pero tampoco se pronuncian en contra de la política exterior estadounidense, dado que ello pudiera tener consecuencias para sus relaciones de tipo comercial con ese país, por ejemplo, Uruguay y Chile. En medio de estas posturas es que surge la postura de Arias, directo

en su crítica, pero a la vez pacifista y conservador. Aún es muy temprano para vislumbrar en materia de acción exterior — específicamente en su relación con Estados Unidos y con el resto de países latinoamericanos— los efectos de sus recientes declaraciones, pero es un asunto sobre el cual se debe estar a la expectativa, por lo alternativo de la propuesta.

No hay que olvidar en este contexto, que hacia dentro del país centroamericano, Arias enfrenta fuertes retos y descontentos populares, lo cual podría desviarlo de sus aspiraciones hacia el exterior, quedando todo en simples palabras, producto de la euforia del momento.

Los retos al interior: “¿Problemas en el paraíso?”

Es conocido el texto de Mitchell A. Seligson de 2001, *¿Problemas en el paraíso? La erosión en el apoyo al sistema político y la centroamericanización de Costa Rica 1978-1999*. Dicho autor parte de la observación sobre cómo Costa Rica, tradicional y universalmente reconocida “como la democracia más antigua y estable de América Latina”, estaba cambiando, pues ya no era más el “paraíso democrático”. La evidencia presentada en su artículo sugería que dicho cambio no sería transitorio, sino profundo y de largo plazo, viéndose reflejado en la erosión del apoyo al sistema, drenando “el amplio reservorio de legitimidad que el país tuvo en el pasado”.

Seligson sostuvo que los altos niveles de abstencionismo electoral que se dieron abruptamente en 1998 podrían modificarse bajando un poco en las siguientes elecciones, pero señaló que era poco probable que regresaran a su nivel tradicional —un 18% y un 19% para cada elección desde 1962, con excepción de 1974, cuando fue del 20% y de 1982, año en el que alcanzó el 21% hasta que en 1998 subió a 30%. De hecho, los niveles de abstencionismo en las elecciones presidenciales subsiguientes en

lugar de bajar, han tendido a subir. En 2002 fue de 31.16%, y en las últimas de 34.7%. Seligson sugirió que el desafío clave para el liderazgo costarricense consistía en identificar y determinar con precisión los factores causantes de la baja en la legitimidad del sistema político si se pretendía revertir las tendencias.

No cabe la menor duda que Óscar Arias tiene ese gran desafío por delante y está consciente de ello. Si bien por sus características personales y el prestigio que acompaña al Premio Nobel, tiene gran potencial para establecer un liderazgo regional alternativo de tipo ético en materia de relaciones exteriores, al interior de su país se enfrenta con enormes retos. Actualmente, en Costa Rica existe un gran desinterés ciudadano por participar en los comicios electorales y además su bienestar social no es el mismo de antes: su tasa de pobreza actual es de 21,2%, existe un alto nivel de deserción escolar, un índice creciente de inseguridad ciudadana, una infraestructura vial colapsada y un sistema de seguridad social problemático en cuanto a la prestación de servicios públicos. Estas deficiencias son resultado de la política económica y social de los últimos gobiernos, los cuales, además, se han visto envueltos en graves escándalos de corrupción en 2004 y 2005. En síntesis, se percibe un desencanto ciudadano con la política y los políticos, que se refleja en el renacer de intensas y amplias protestas populares, las cuales Arias ha tenido que enfrentar desde el día 1 de su mandato.

Así, el contexto social, político y económico en el que se llevaron a cabo las elecciones de las que resultó ganador Óscar Arias, le presenta una importante cantidad de desafíos de carácter urgente, que de no resolverlos positivamente derivará en la inevitable tendencia a la “centroamericanización” de Costa Rica, erosionando a la vez su potencial liderazgo regional.

Saca y mete en el gabinete

Inestable. Esa es la palabra que mejor define al “equipo” del presidente Elías Antonio Saca. En menos de dos años se ha ido deshaciendo con renunciaciones y destituciones, o rotando funcionarios de un cargo a otro. Los cambios comenzaron antes de su llamado electoral a hacer “equipo” con el retiro de su primer Ministro de Turismo, Luis Cardenal, y siguieron en Seguridad Pública, Centros Penales, la Policía Nacional Civil (PNC), Hacienda, la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). En algunas ocasiones, se dieron tras sendas denuncias de corrupción para evitar “manchar” la imagen de “Tony”. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de esos señalamientos ha prosperado en los tribunales nacionales; al contrario, sólo han noticias efímeras en los medios que no sonaron más tras la destitución o retirada de las personas cuestionadas.

Pasó con el citado Cardenal, quien dimitió cuando su empresa —el “Aserradero El Triunfo”— participó en la licitación de un proyecto financiado con fondos públicos y ganó el concurso, pese a que legalmente está prohibido. El señor se defendió alegando que desconocía tal disposición y Saca lo apoyó diciendo que fue un “error involuntario”, pese a que la Constitución determina que nadie puede alegar ignorancia de la ley cuando se le acusa de un delito; así, este último le facilitó una salida “elegante” de un problema serio que pudo dejarlo mal parado a él y a su partido de cara a las elecciones municipales y legislativas recién pasadas.

También para proteger sus intereses partidarios, el presidente colocó a Rodrigo Ávila en la dirección general de la PNC tras destituir a Ricardo Meneses. Con la llegada de Ávila, quien fungía como Viceministro de

Seguridad Pública y antes había dirigido la corporación policial, Saca anunció un nuevo giro en la investigación del delito y pidió tiempo a quienes comenzaban a criticar su gestión en este ámbito. A Meneses también le ofreció una salida “graciosa” al inventarse un cargo: agregado policial en Washington, D. C.; así salió de la institución sin reconocerse su fracaso.

Los reemplazos continuaron este año. Algunos, como ya se dijo, respondieron a la lógica de proteger la imagen del Ejecutivo y del partido que Saca dirige; otros evidenciaron cómo se cuidan los intereses de la gran empresa. El movimiento en el Ministerio de Hacienda es un ejemplo de eso. Tras la aprobación de los préstamos para financiar el presupuesto del 2006, se formó una llamada comisión de “ilustres” para analizar la situación fiscal y sugerir formas de enfrentar la creciente deuda externa. Quienes la integraban recomendaron aumentar los gravámenes y aprobar el impuesto predial; éste último se paga de acuerdo al tamaño de las propiedades y afecta más, obvio, a quien más tiene. Guillermo López Suárez, titular de la cartera hasta hace poco, vio con buenos ojos la propuesta y en ese preciso momento lo despidieron; el cargo fue asumido por un alto representante de la empresa privada, la misma que enfrentó con López Suárez y que no entregar más de sus ganancias al erario nacional. El poderoso sector se aseguró colocando a William Handal en tan importante puesto.

El mete y saca no terminó ahí. Después se fue Jorge Mariano Pinto de la Dirección del ISSS, luego que se abrieron en su contra varios procesos en la Corte de Cuentas de la República y se admitieron siete demandas en la Corte Suprema de Justicia. Además, Pinto se enfrentó al Consejo Directivo de la institución y a la unánime auditoría de los medios de comunicación

que nunca dejaron de cuestionar su trabajo. Sin embargo, fue este período el de menor confrontación con el sindicato. Igual que en los otros casos, a Pinto se le tendió una alfombra roja para retirarse. Fue el propio presidente quien lo despidió con elogios al calificar como una “obra espectacular” su labor. ¿Por qué entonces, si había sido tan bueno, no intentó retenerlo?

El mandatario también apartó de su camino a Manuel Arrieta, presidente de ANDA. En buena medida, lo hizo por la creciente presión ciudadana frente al deficiente servicio que reciben de la autónoma; pero, también, pudo haber influido las acusaciones de corrupción hechas por el sindicato de la institución desde diciembre del año pasado. A este funcionario, que sustituyó a otro acusado de corrupción durante el quinquenio de Francisco Flores y fue incapaz de solucionar el desabastecimiento del vital líquido, se le ofreció una salida decorosa: un puesto en la Secretaría Técnica de la Presidencia, en labores de modernización. Por lo menos eso fue lo que aseguró Saca.

Tanto el movimiento realizado en la dirección de ANDA como el del ISSS, deben ser analizados con lupa. Ambas instituciones han sido la minita de oro de funcionarios incapaces y deshonestos que las saquearon sin que hasta el momento hayan enfrentado el peso de la ley. En estos casos, no hubo mano ni “dura” ni “súper dura”.

Además de los intereses partidarios y empresariales que se protegen con estos movimientos, también se advierte la ausencia de un verdadero plan de nación. Como se dijo antes, en este mismo espacio, es necesario contar con una agenda común y trabajar en serio para alcanzar sus metas. Por eso, porque no existe dicha agenda, las persona que llegan a cubrir determinadas vacantes no responden a la lógica de idoneidad que debería exigirse por el bien del país. Por ejemplo, César Funes no tiene ninguna experiencia manejando una autónoma como ANDA. Su única carta de pre-

sentación en la administración pública ha sido el estar al frente de la Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Cuál fue el criterio para confiarle el manejo del recurso hídrico? ¿A qué perfil responde?

Tampoco se entiende que el presidente Saca coloque en el Seguro Social a quien él mismo descalificó al afirmar que buscaba un administrador y que Nelson Nolasco sólo manejaba la parte médica; éste —actual director del ISSS— fue hombre de confianza de Pinto, su antecesor, lo cual anuncia continuidad de la labor de alguien tan cuestionado. ¿Es eso lo que se quiere?

Para colmo de males, hasta el momento, ninguno de los cambios realizados por el presidente ha dado los frutos prometidos. Pese a que Saca prometió al inicio de su gestión que convertiría al turismo en uno de los pilares de la economía, lo único que se ha logrado es poner el nombre del país en la parte trasera de las calzonetas del Cádiz F. C., equipo de fútbol recién descendido de categoría en España. Con el cambio en la Policía no se han disminuido los altos niveles de violencia e inseguridad. Ahora, “los nuevos” del gabinete tienen menudos retos ante sí. El ministro de Hacienda tendrá que evitar el entrampamiento legislativo del presupuesto para el 2007 y deberá superar esa gran dependencia de los préstamos externos, sin aumentar los impuestos. César Funes, por su parte, debe ingeniárselas para mejorar de verdad el servicio de agua potable y Nelson Nolasco tendrá que buscar la forma de acabar con el desabastecimiento de medicamentos en el ISSS, sin ser acusado de corrupción. Ojalá, por el bien del país, que todos puedan enfrentar con éxito tales desafíos y otros más pues está en juego la salud, el medio ambiente y el bienestar económico de la población.

Finalmente, es importante destacar el papel desempeñado por quienes han salido a las calles para demandar un mejor servicio de agua, así como aquellos que han acudido a los tribunales para demandar los ne-

gocios sucios y aportar a la transparencia pública. También debe hacerse un llamado enérgico al nuevo Fiscal para que no deje en la impunidad ningún caso de corrupción, sin importar quién esté involucrado. Asimismo, hay que exigirle a la Asamblea Legislativa que haga funcionar los mecanismos para controlar los abusos del Ejecutivo. Desde Roberto Orellana Milla cuando fungía como presidente del Banco Central de Reserva, el Órgano Legislativo no ha utilizado la interpelación como herramienta para frenar el despilfarro de los fondos nacionales. No más improvisación, corrupción ni impunidad gubernamental. Es necesario que pare ya este saca y mete en el gabinete para que El Salvador —algún día sea un país normal como el que describe

Lanssiers: “(...) donde las estructuras, eficientes y compasivas, reconozcan al individuo, lo protejan y lo promuevan; un país donde cada ciudadano se dé cuenta que la solidaridad expresada concretamente en el quehacer de la vida cotidiana facilita la vida de los otros y la suya propia; donde el burócrata, el gasfitero, el albañil, el policía y el juez comprendan que su honradez y su conciencia profesional son la garantía de una sociedad civilizada (...) donde pueda vivir sin temor a ser engañado; donde no me crezcan, por mutación genética, antenas para detectar los peligros que me rodean; un país donde la ley y aquellos que la aplican estén al servicio de los débiles; donde no necesite ‘padrinos’ para obtener justicia ni plata para comprarla”.

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	\$ 50.00
El Salvador	
personal	\$ 15.00
correo	\$ 20.00
Centro América y Panamá	\$ 35.00
Norte y Sur América	\$ 65.00
Europa y otras regiones	\$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escribanos a cidai@cidai.uca.edu.sv